

El Grupo de los Tres y el proceso de regionalización en la Cuenca del Caribe

Andrés Serbin

Andrés Serbin: Antropólogo y doctor en ciencias políticas venezolano. Director del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP) y Profesor de la Universidad Central de Venezuela, Caracas. Autor de numerosos artículos y libros sobre el Caribe, los más recientes de los cuales son *Medio ambiente, seguridad y cooperación regional en el Caribe*, y *El Grupo de los Tres: Concertación política, cooperación subregional y liberalización comercial*.

El proceso de regionalización en la Cuenca del Caribe, del cual el Grupo de los Tres es un protagonista esencial más allá de los condicionamientos y presiones que puedan imponer el sistema internacional y los actores extrarregionales, ha evidenciado, en los últimos cinco años, la articulación progresiva de un bloque político-económico regional, por encima de las diferencias políticas, lingüísticas y culturales, las vulnerabilidades y distintas magnitudes de las respectivas economías y las dificultades internas que, a raíz de los programas de reconversión económica, han vivido la mayoría de los países de la región.

Durante la Quinta Reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Ocho, realizada en Puerto Ordaz Venezuela - en marzo de 1989, se constituyó formalmente el Grupo de los Tres (G-3), con la participación de México, Colombia y Venezuela, teniendo como objetivo explícito el promover la integración económica entre los países miembros y la cooperación con Centroamérica y el Caribe. Esta iniciativa, hilvanada a lo largo de sucesivas cumbres presidenciales y numerosas reuniones ministeriales y técnicas a lo largo de los últimos años, culminó recientemente en el encuentro entre los presidentes del G-3 y los presidentes centroamericanos en Caracas, el 11 y 12 de febrero de 1993.

En líneas generales, el proceso de surgimiento y consolidación del G-3 responde a la revitalización y al aceleramiento generalizado de los procesos de integración subregional desarrollados en América Latina y el Caribe desde finales de la década

del 80. En el marco de este proceso, junto con la reactivación de esquemas como el Pacto Andino o la CARICOM, surgen otros nuevos como el G-3 y el Mercosur. Está de más reiterar que estos procesos de integración subregional que se desarrollan en el ámbito latinoamericano y caribeño en los últimos años, responden tanto a una serie de factores exógenos como endógenos, y a su eventual articulación. Entre los determinantes exógenos se cuentan las transformaciones del sistema internacional con el fin de la guerra fría y el aceleramiento de los procesos de globalización e interdependencia económica que conllevan el desarrollo de una dinámica global crecientemente focalizada en los temas económicos y comerciales, en torno a la configuración de tres bloques económicos - la CEE, América del Norte y el Japón y sus socios del Sudeste Asiático (*Moneta*, 1992a) -. Esta dinámica prioriza gradualmente en la agenda internacional los temas económicos vinculados al intercambio comercial, los flujos de capital y la transferencia tecnológica (*Quenan*).

A la consecuente presión de un sistema internacional con estas características - y de un nuevo orden mundial emergente de la guerra fría y del antagonismo bipolar -, se asocia una serie de factores endógenos: las secuelas del endeudamiento externo y de la crisis económica de la llamada década perdida; los procesos de re-democratización y consolidación democrática, y los programas de ajuste económico que preconizan una estrategia de crecimiento basada en la promoción de las exportaciones y la liberalización comercial. En este marco debe ubicarse el actual impulso de los procesos de integración subregional en América Latina y el Caribe, en función de orientaciones sustancialmente distintas de las promovidas desde la década del 60, en tanto se enfatiza la apertura comercial, la diversificación y la promoción de exportaciones no tradicionales y un rol más activo del sector privado en el proceso de integración (*Rodríguez*).¹

Sin embargo, a diferencia de otras experiencias de regionalización, los procesos latinoamericanos están anclados significativamente en experiencias de concertación política previa. De hecho, la mayor parte de estos procesos está orientada por objetivos e intereses combinados, donde se articulan aspectos políticos, económicos y geopolíticos relevantes, al punto que en la mayoría de los casos las experiencias recientes de regionalización en América Latina y el Caribe configuran procesos de carácter político económico, con diferencias substanciales con respecto a las experiencias de otras latitudes (*Frohman; Moneta 1992b; Hurrel*).

¹ Cf. los diversos documentos sobre políticas de convergencia e integración producidos en 1991 y 1992 por la CEPAL.

Pese a que uno de los referentes más importantes de la regionalización en América Latina y el Caribe está dado por el establecimiento del Tratado de Libre Comercio en América del Norte (TLCAN) entre EE.UU., Canadá y México, y el lanzamiento - en junio de 1990- de la Iniciativa para las Américas (IPA) por parte del presidente Bush, con la intención de crear una zona de libre comercio hemisférica, cabe señalar que este proceso de aceleración de la integración subregional se inicia con anterioridad, como reacción al cuadro de condiciones exógenas y endógenas antes citado y a la creciente preocupación de los países de la región por su marginalización del sistema internacional (*Weintraub*). En este contexto, la experiencia del G-3 posee una serie de rasgos distintivos, en tanto implica la creación de un nuevo esquema sobre la base de una experiencia de concertación política exitosa, que responde a un conjunto de condiciones subregionales particulares, marcadas por una nueva situación geoestratégica y que avanza, con altibajos y dificultades, por un proceso de liberalización comercial e integración económica.

Concertación política y cooperación subregional

La experiencia de concertación política del G-3, pese a formalizarse bajo este nombre recién en 1989, se remonta a la década del 70 y está signada tanto por la situación hemisférica en general, como por el desarrollo de crecientes tensiones y el incremento de la inestabilidad política en la Cuenca del Caribe en particular, configurada a partir de esa década. Por un lado, para mediados de los 70, en América del Sur estaban instaurados una serie de regímenes militares, frecuentemente antagónicos en sus intereses a los regímenes democráticos de México, Colombia y Venezuela, a su vez crecientemente aislados en el contexto hemisférico. El mayor margen de autonomía en la esfera internacional y subregional de estos tres actores, merced al incremento de los precios del petróleo y de otras materias primas, y la búsqueda de nuevas alianzas para promover modalidades de diplomacia colectiva y evitar su aislamiento, lleva a estos tres Estados a vincularse progresivamente con los países de la Cuenca del Caribe - tanto con los Estados centroamericanos como con los recientemente independizados países de habla inglesa y holandesa - (*Serbin* 1991a). En el contexto de una atmósfera tercermundista que enfatiza la cooperación Sur-Sur, se despliegan iniciativas como la creación del Sistema Económico Latinoamericano-SELA (con la inclusión de Cuba); la incorporación de los tres países al Banco de Desarrollo del Caribe y el primer esbozo de lo que posteriormente va a constituir el Pacto de asistencia petrolera de San José impulsados por México y Venezuela (*Serbin* 1991b). De hecho, en este marco, se inicia el desarrollo progresivo de una

mayor interacción diplomática y de crecientes coincidencias políticas entre los tres países, especialmente en lo referente a los temas regionales (*Serbin 1993a*).

Por otra parte, este proceso de convergencia política se acentúa con el desencadenamiento de la crisis centroamericana a finales de los 70. Inicialmente, los tres países convergen en la iniciativa de Nassau que después dará lugar, sin su participación y la de Canadá, a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe anunciada por el presidente Reagan en 1983. El mismo año, sin embargo, los tres países, junto con Panamá - con la cual se ha dado un proceso de creciente acercamiento y convergencia a partir de la década del 70 y, en especial, de la firma del Tratado entre Carter y Torrijos -, constituyeron el Grupo de Contadora, que desempeñaría un papel crucial en el proceso de pacificación de Centroamérica, evitando, por un lado, una intervención directa de EE.UU. en la subregión, e impulsando, por otro, una salida regional a la crisis que culminará con la firma de Esquipulas II en 1986 (*Díaz Callejas; Cepeda-Pardo; Rojas-Solis*). En suma, a partir del 70 y a lo largo del 80, los tres países, pese a definir prioridades y objetivos circunstancialmente divergentes en sus respectivas políticas exteriores, tanto a nivel internacional como regional, logran consolidar una experiencia de convergencia diplomática y de concertación política de crucial influencia en la dinámica geopolítica de la Cuenca del Caribe, en un contexto donde los principales interlocutores están representados, por un lado, por EE.UU. y los países de la CEE, y por otro, por actores regionales como las naciones centroamericanas, Cuba y los países y territorios del Caribe no-hispánico (*Serbin 1991a y 1993a*).

La experiencia de Contadora implicó un reaprendizaje de la concertación política latinoamericana, que se amplió no sólo con la constitución del Grupo de Apoyo y la posterior conformación del Grupo de los Ocho y su transformación en el Grupo de Río, basado, con matices y altibajos, tanto en el proceso de redemocratización, consolidación y defensa de la democracia que vivió América Latina en la década del 80, como en la revalorización de algunos principios como la no intervención, la autodeterminación y la resolución pacífica de conflictos propios de las tradiciones de la diplomacia regional (*Frohman*). Por otra parte, el Grupo de Contadora posibilitó una experiencia fundamental de las llamadas potencias regionales (*Grabendorf*) de cooperación con la Cuenca del Caribe. Esta experiencia se asoció a una preocupación muy concreta por parte de los tres países por la estabilidad regional y por los efectos de la confrontación Este-Oeste en el área. Para México, la crisis centroamericana puso de relieve las amenazas que un proceso de desestabilización y de intervención de actores extrarregionales podrían implicar para su propia seguridad nacional y estabilidad política (*Bagley*). De una manera

similar, pero a diferente escala, la crisis centroamericana repercutió en los intereses de Colombia (*Drekonja; Pardo-Tokatlian*) y de Venezuela (*ToroHardy; Josko*). Por otra parte, para este último país, las repercusiones de la crisis y el antagonismo entre EE.UU. y Cuba implicaron una amenaza específica a la estabilidad del Caribe insular, percibido como un área estratégica vital para los intereses venezolanos (*Serbin 1993b*). En este contexto, la cooperación con los países de la Cuenca del Caribe se constituyó en un instrumento clave para garantizar un grado de influencia significativo sobre la estabilidad regional - a partir de un diagnóstico sociopolítico de la crisis sustancialmente distinto al eminentemente geoestratégico de EE.UU. - que se articuló en eje decisivo de la concertación política entre los tres países.

La experiencia del G-3 posee una serie de rasgos distintivos, en tanto implica la creación de un nuevo esquema sobre la base de una experiencia de concertación política exitosa.

Cooperación subregional y liberalización comercial

Es así como al constituirse formalmente el G-3 en 1989, una de las dimensiones más resaltantes de esta decisión airó en torno a la cooperación con Centroamérica y el Caribe, al punto de dar lugar a la constitución de un Grupo de Alto Nivel (GAN) específico para este tema. Esta dimensión particular de la conformación del G-3 responde asimismo a un nuevo entorno subregional que aumenta el perfil de involucramiento de los tres actores en la subregión. De hecho, como lo hemos analizado en otro lugar, el fin de la guerra fría ha dado lugar a un creciente *vacío geopolítico* en la Cuenca del Caribe, a raíz del desentendimiento progresivo de los actores extrarregionales con respecto al área. La nueva agenda de seguridad para estos actores, mas allá de los efectos inerciales del antagonismo con Cuba, ha dejado de pasar por la contención de la influencia cubano-soviética en la región para enfatizar, a otra escala, aspectos como el control del narcotráfico, el flujo migratorio hacia el Norte y la problemática ambiental. Aspectos que no necesariamente se ubican en la misma jerarquía de prioridades para los actores regionales (*Serbin 1992a*).

En este marco, dada la tradicional vulnerabilidad económica y política de los Estados de la Cuenca del Caribe aumenta significativamente la preocupación - y el involucramiento - de las tres potencias medias por la seguridad y la estabilidad regional. Una ilustración cabal de esta preocupación está representada por la percepción actual de México, Colombia y Venezuela de las amenazas existentes

para la estabilidad regional en el caso de una eventual transición política abrupta en Cuba - a raíz de las actuales dificultades internas y externas por las que atraviesa la isla -, y por la decisión de intervenir más activamente en la reincorporación de Cuba a la comunidad latinoamericana y caribeña, evidenciada en su momento en la invitación hecha a Fidel Castro para participar en la reunión presidencial del G-3 en Cozumel en 1991 (*Serbin 1993a*). Esta convergencia de intereses en el ámbito regional, pese a los matices y énfasis distintos en los principios, prioridades y objetivos de los tres actores, da pie no sólo para la concertación política en el seno del G-3, sino también para su articulación con una activa política de cooperación económica con Centroamérica y el Caribe.

Algunos hitos relevantes de este proceso y del actual discurso regionalista se evidencian, en el marco de la nueva atmósfera de liberalización comercial y de integración económica, en las iniciativas de libre comercio que jalonan la relación de los tres países con la subregión en los últimos años: su incorporación como observadores a la CARICOM, el acuerdo marco orientado al establecimiento de un acuerdo de libre comercio firmado entre México y los países centroamericanos en Tuxtla Gutiérrez en enero de 1991, una iniciativa similar hacia Centroamérica por parte de Venezuela firmada en junio de 1991, el acuerdo de libre comercio no-recíproco en vigencia entre este país y los Estados miembros de la CARICOM desde enero de 1993, la disposición de Colombia de avanzar en conjunto con Venezuela en estos acuerdos con Centroamérica y el Caribe anglófono, y la reciente cumbre de los presidentes del G-3 con los mandatarios de los países centroamericanos, en Caracas en febrero de 1993, para afirmar los acuerdos de libre comercio entre sus países y profundizar en la constitución de una zona de libre comercio subregional.

En este sentido, al margen de las dificultades evidenciadas en el avance del establecimiento de un acuerdo de libre comercio entre México, por un lado, y Venezuela y Colombia, por otro, en el seno del G-3, y las reticencias de algunos países como Costa Rica de firmar un acuerdo de carácter no-recíproco similar al de los otros países centroamericanos con Venezuela y Colombia, es evidente que, en el último lustro, se ha dado una serie de pasos significativos en el proceso de integración económica de la región, dando lugar a una profundización del proceso de regionalización. La decisión de que la próxima cumbre presidencial del G-3 se realice en conjunto con la CARICOM y la iniciativa de este grupo de Estados de constituir una Asociación de Estados del Caribe, recomendada por la Comisión de las Indias Occidentales (*West Indian Commission*), son otros hitos fundamentales de

este proceso, que contribuyen a darle un perfil específico a la dinámica subregional de la Cuenca del Caribe.

El Grupo de los Tres y el proceso de regionalización: un balance

No obstante los éxitos alcanzados y las expectativas despertadas por el creciente desempeño protagónico del G-3 a nivel subregional, el Grupo enfrenta un conjunto de dificultades de orden interno y externo que condicionan su metamorfosis de un grupo de concertación política con significativa influencia política y económica subregional en un acuerdo de libre comercio o, a más largo plazo, en un esquema de integración subregional. Una serie de factores diversos, tanto económicos y comerciales como políticos y geopolíticos se erigen, a corto plazo, como significativos obstáculos a este proceso. Resaltan en primer lugar las asimetrías y diferencias económicas entre Venezuela y Colombia, por un lado, y México, por otro. Las diferencias en el desarrollo y las potencialidades económicas respectivas y en los avances de la reestructuración económica y de los programas de ajuste en cada uno de ellos se evidencian en las dificultades para establecer un acuerdo de libre comercio (ALC) de carácter no asimétrico. De hecho, los preparativos y resultados de la reunión de Caracas en febrero de 1993, han puesto de relieve la insistencia de Colombia y de Venezuela en que el ACL y las medidas arancelarias adoptadas respeten las asimetrías generales y sectoriales de estos dos países con la más vigorosa economía mexicana de una manera similar a la lograda por México en las negociaciones con EE.UU. y Canadá para el establecimiento del TLCAN.

Asimismo, esta diferenciación de expectativas se articula con los diferenciales avances logrados por la integración económica entre Colombia y Venezuela, y el interés de México en que la concertación económica del G-3 se acote a un acuerdo de libre comercio sin llevar, a corto plazo, a un proceso de integración. En este sentido, las eventuales convergencias en el plano comercial y financiero que puedan lograr los países miembros no sólo están condicionadas por esta diferenciación, sino también por los avances de los respectivos programas de ajuste y la posibilidad de armonizar sus políticas macroeconómicas, articuladas según las respectivas estrategias de desarrollo y las diferentes fases de profundización de las mismas, que afectan la implementación técnica específica en las políticas industriales, los procesos de desregulación y el establecimiento de normas arancelarias en relación con sus políticas comerciales externas. Estos desajustes y asimetrías en el plano económico, se asocian con significativas diferencias en los procesos de reforma y modernización de los sistemas políticos y las reacciones y secuelas distintivas que aquellos han generado en el ámbito político y social. En

este sentido, es de tener en cuenta que el gobierno del presidente Salinas de Gortari ha mantenido un clima de estabilidad política no obstante los costos sociales del programa de ajuste y del proceso de integración en TLCAN, movilizándolo exitosamente a diversos sectores sociales, incluyendo un amplio sector empresarial, en el proceso de reforma y modernización del país; mientras que la espiral de violencia vinculada al narcotráfico y a la guerrilla ha perturbado el desempeño del gobierno del presidente Gaviria; y la reacción de sectores populares y de una parte de las fuerzas armadas ha puesto en cuestión, a través del *caracazo* y de dos intentos frustrados de golpe, la gestión del presidente Carlos Andrés Pérez. Por otra parte, no obstante los avances de la integración colombo-venezolana, constituida en el eje dinámico del proceso de integración del Pacto Andino (*Rojas*), un tema recurrente de fricción entre los dos países, incentivado por las respectivas crisis políticas, es el de la resolución de las disputas y controversias limítrofes pendientes, frecuentemente enarboladas por grupos nacionalistas y sectores militares de ambos lados de la frontera para oponerse a la integración (*Müller Rojas; Serbin 1993c*).

Junto con estas circunstancias endógenas, existe una serie de factores exógenos que conspiran contra la profundización en el establecimiento de un ALC del G-3. El TLCAN se ha convertido en un referente fundamental y en un modelo de acuerdo de libre comercio que, por un lado, incide sobre el desarrollo de acuerdos similares en el ámbito hemisférico y subregional, particularmente a raíz del lanzamiento de la IPA y de un llamado a constituir una zona hemisférica de libre comercio sobre la base de las pautas establecidas en su marco, y, por otro, afecta las relaciones subregionales en función de las expectativas y del posicionamiento de los distintos actores para incorporarse rápidamente en el esquema de libre comercio de América del Norte. En este sentido, el tema de las cláusulas de adhesión al mismo se evidencia como un elemento clave en el proceso de vinculación con el TLCAN. En este marco el carácter prioritario de las relaciones económicas de la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe con EE.UU. - principal mercado y socio comercial, acreedor y fuente de inversiones y tecnología - es decisiva a la hora de evaluar sus objetivos en el plano internacional y en el proceso de regionalización (*Rojas Aravena*).

Consecuentemente, este referente tiene dimensiones y alcances diversos para cada uno de los miembros del G-3 y da lugar a distintas percepciones y expectativas acerca de su vinculación con el mismo. Mientras que para México configura un elemento de contrabalance político de su asociación al TLCAN y, más específicamente, a EE.UU., para Colombia y Venezuela la vinculación con México

abre la perspectiva - no necesariamente fundada - de que pueda favorecer sus propias expectativas de ingreso al esquema de América del Norte, más allá de las actuales incertidumbres introducidas por la administración Clinton en su materialización. Para México la relación con EE.UU., al margen de estas incertidumbres y en función de las transformaciones encaradas en su economía, tiene un carácter prioritario, sólo equiparable a la relación con el G-3 (o el Grupo de Río) por sus beneficios políticos, pero no por sus ventajas económicas. Asimismo, la experiencia acumulada por México en el proceso de negociación con EE.UU. contribuye a reforzar las diferencias con Venezuela y Colombia en la conformación de un ALC entre los tres países. Por otra parte, para Colombia el interés por el G-3 - y por su proceso de integración con Venezuela - se articula alrededor de prioridades económicas asociadas a la ampliación de su espacio económico y de su proyección comercial tanto en el G-3, como en una eventual incorporación al TLCAN. Finalmente el interés de Venezuela presenta rasgos combinados, ya que coinciden sus expectativas de abrir un espacio económico ampliado para su intento de diversificar sus exportaciones, con una necesidad geopolítica de asegurar la estabilidad subregional - particularmente en el área del Caribe insular - y un posicionamiento estratégico para negociar con actores extrarregionales (Serbin 1993d).

En este marco, la creación original de once Grupos de Alto Nivel (GAN) para discutir los avances en distintos campos, da pie para una compatibilización parcial de sus prioridades respectivas, particularmente en lo que se refiere a comercio, energía y cooperación subregional, pese al sobredimensionamiento que esta multiplicación de GAN pueda implicar, y que la última cumbre presidencial ha tratado de acotar (*El Diario de Caracas*, 11/2/ 93, p. 27). Tomando en cuenta este conjunto de limitaciones y dificultades es de señalar, sin embargo, que los avances en el proceso de regionalización pro movidos por el G-3 dan pie a un balance positivo en términos de la consolidación de su proyección subregional y de su transmutación en un referente fundamental en la Cuenca del Caribe, en el marco del vacío geopolítico existente y de la reacción al proceso de globalización. Desde este punto de vista, la experiencia de concertación política sigue profundizándose y consolidándose a través de nuevos desafíos regionales, uno de los cuales - la eventual transición cubana - puede requerir de particulares capacidades mediadoras del G-3, no obstante los énfasis y matices distintos que pueda conferirle la política exterior de cada uno de los Estados miembros. En este marco, pese a la referenciación permanente de la fuerza centrípeta del bloque de América del Norte, y en particular de EE.UU., el proceso de regionalización ha implicado que los actores y protagonistas regionales asuman crecientemente un papel más

relevante, al punto que, en la actualidad, la dinámica subregional de la Cuenca del Caribe se caracteriza básicamente por la interacción protagónica del G-3, los Estados centroamericanos y los países miembros de la CARICOM.²

Como consecuencia, el proceso de regionalización en la Cuenca del Caribe, del cual el G-3 es un protagonista esencial más allá de los condicionamientos y presiones que pueda imponer el sistema internacional y los actores extrarregionales, ha evidenciado, en los últimos cinco años, la articulación progresiva de un bloque político-económico regional, por encima de las diferencias políticas, lingüísticas y culturales, las vulnerabilidades y distintas magnitudes de las respectivas economías y las dificultades internas que, a raíz de los programas de reconversión económica, ha vivido la mayoría de los países de la región. Sin embargo, la aparente viabilidad geopolítica y diplomática de este bloque encuentra, a corto y a mediano plazo, una serie de escollos en las asimetrías económicas de sus principales actores, en las dificultades por las que atraviesan para materializar los diversos acuerdos de libre comercio y de profundización de la integración económica y en los obstáculos existentes para una más ventajosa y competitiva inserción en el sistema internacional que no implique costos mayores para amplios sectores de su población.

Referencias

- BAGLEY, BRUCE: «Los intereses de seguridad de México y de Estados Unidos en Centroamérica» en Aguayo Q., Sergio y Bruce Bagley (comps.): *En busca de la seguridad perdida*, Siglo XXI, México, 1990, pp. 315-339.
- CEPEDA U., FERNANDO Y RODRIGO PARDO: *Contadora: desafío a la diplomacia tradicional*, CEI/Oveja Negra, Bogotá, 1985.
- DIAZ CALLEJAS, APOLINAR: *Contadora: desafío al imperio*, Oveja Negra, Bogotá, 1985.
- DREKONJA, GERHARD: *Retos de la política exterior colombiana*, CERC, Bogotá, 1983.
- FROHMAN, ALICIA: *Puentes sobre la turbulencia. La concertación política latinoamericana en los ochenta*, FLACSO, Santiago, 1990

² No siempre las relaciones entre estos tres grupos de actores han sido fluidas, en particular entre los países centroamericanos y los de la CARICOM a raíz de las exportaciones de banano a la CEE. La iniciativa del presidente Callejas, en febrero de 1992, de reunir a estos dos grupos para promover posiciones conjuntas no ha tenido éxito. Por otra parte, al margen de todas las convergencias señaladas recientemente, existe una evidente competencia entre el G-3 y la CARICOM por el liderazgo regional que probablemente se hará patente si avanza la iniciativa de crear una Asociación de Estados del Caribe.

GRABENDORF, WOLF: «Las potencias regionales en la crisis centroamericana: una comparación de las políticas de México, Venezuela, Cuba y Colombia» en Muñoz, Heraldo y Joseph Tulchin (eds.): *Entre la autonomía y la subordinación*, GEL, Buenos Aires, 1984, pp.267-296.

GRUPO DE LOS TRES: *Documento de Caracas*, 2/1993.

HURRELL, ANDREW: «Latin America in the New World Order: a regional bloc for Latin America?» en *International Affairs*, vol.68, N° 1, 1-1992, pp. 121-139.

JOSKO DE GUERON, EVA: «Cambio y continuidad en la política exterior de Venezuela: una revisión» en Romero, Carlos (comp.): *Reforma y política exterior en Venezuela*, COPRE/INVESP/ Nueva Sociedad, Caracas, 1992, pp. 41-76.

MONETA, CARLOS (1992a): «El sistema internacional en la década del noventa», en *ibid.*, pp. 19-40.

- (1992b): «Los espacios de intercambio económico regional» en *Capítulos del SELA* N° 31, pp. 10-23.

MÜLLER ROJAS, ALBERTO: «Venezuela y la seguridad en el Caribe», ponencia presentada al taller La Nueva Agenda de Seguridad en el Caribe, INVESP, Caracas, 7/1992.

PARDO, RODRIGO y JUAN TOKATLIAN: *Política exterior colombiana*, Tercer Mundo/Uniandes, Bogotá, 1988.

QUENAN, CARLOS: «Impacto de los procesos internacionales en la realidad latinoamericana: América Latina y la economía de los grandes bloques», informe para la COPRE, d. i., Caracas, 6/1991.

RODRIGUEZ, MIGUEL: «Apertura económica e integración en América Latina: la experiencia venezolana» en McCoy, Jeniffer et al. (eds.): *La democracia bajo presión: política y mercado en Venezuela*, North-South Center/INVESP/Nueva Sociedad, Caracas, 1993.

ROJAS ARAVENA, F. Y LUIS GUILLERMO SOLIS: *¿Súbditos o aliados?*, Porvenir/FLACSO, San José, 1988.

ROJAS ARAVENA, F. (ed.): *A un año de la Iniciativa de las Américas*, FLACSO, Santiago, en prensa.

ROJAS, LAURA: «Aspectos económicos de la política exterior de Venezuela» en Romero, C. (ed.): *op. cit.*, pp. 145-172.

SELA: «Apertura comercial e integración regional en América Latina. Diagnóstico y escenarios alternativos» 7/1991.

SERBIN, ANDRES (1990): *Caribbean Geopolitics: Toward Security Through Peace?*, Lynne Rienner, Boulder.

- (1991a): «El Caribe: mitos, realidades y desafíos para el año 2000» en Serbin, A. y Anthony Bryan (comps.): *El Caribe hacia el año 2000*, Nueva Sociedad, Caracas, pp. 13-34.

- (1991b): «The CARICOM States and the Group of Three: A New Partnership Between Latin America and the Non-Hispanic Caribbean?» en *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, vol. 33, N° 2, verano, pp. 53-80.

- (1992): «Cooperación para la paz en el Caribe: utopías, realidades y obstáculos», en CLADDE-FLACSO: *Seguridad, paz y desarme: Propuestas de concertación pacífica en América Latina y el Caribe*, CLADDE-FLACSO, Santiago, pp. 183-196.

- (1993a): «Las transformaciones globales y hemisféricas y la proyección subregional del Grupo de los Tres» en Serbin, Andrés y Carlos Romero (coords.): *El Grupo de los Tres: evaluación y prospectiva*, FESCOL/INVESP/Nueva Sociedad, Caracas.
- (1993b): «Venezuela y el Caribe: ¿un reto persistente?» trabajo presentado en las Jornadas sobre el Grupo de los Tres y la cooperación con la Cuenca del Caribe, Bogotá, enero.
- (1993c): «Medidas de confianza mutua, paz y cooperación en el Caribe», informe para el Proyecto Seguridad Hemisférica en los Noventa, Wiison Center-FLACSO.
- (1993d): «Venezuela el gran viraje y las opciones regionales», ponencia presentada al 34 Congreso de la International Studies Association, Acapulco, marzo.

TORO HARDY, ALFREDO: *La maldición de Sísifo. Quince años de política externa venezolana*, Panapo, Caracas, 1991.

WEST INDIAN COMMISSION: *Time for Action*, Barbados, 1992.

WEINTRAUB, SIDNEY: «The New United States Economic Initiative Toward Latin America» en *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, vol. 33, N° 1, primavera, pp. 1-18.